

INÉS M. POUSADELA

QUE SE VAYAN TODOS

ENIGMAS DE LA
REPRESENTACIÓN POLÍTICA

CLAVES PARA TODOS

COLECCIÓN DIRIGIDA POR JOSÉ NUN

CAPITAL INTELECTUAL

Director	José Nun
Editor general	Jorge Sigal
Edición	Luis Gruss
Coordinación	Cecilia Rodriguez
Corrección	Alfredo Cortés
Dirección de arte	Martín Marotta
Diagramación	Verónica Feinmann
Ilustración	Miguel Rep
Producción	Néstor Mazzei

Derechos exclusivos de la edición en castellano reservados para todo el mundo:

© 2006, Inés M. Pousadela

O 2006, Capital Intelectual

Francisco Acuña de Figueroa 459 (1180) Buenos Aires, Argentina

E-mail: clavesparatodos@capin.com.ar Teléfono: (+54 11) 4866-1881

1ª edición: 7.000 ejemplares

Impreso en Sociedad Impresora Americana S.A., Lavardén 157, Cap. Fed., en agosto de 2006. Distribuye en Cap. Fed. y GBA: Vaccaro, Sánchez y Cía. S.A. Distribuye en interior y exterior: D.LaS.A. Queda hecho el depósito que prevé la ley 11.723. Impreso en Argentina. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin permiso escrito del editor.

CAPITAL INTELECTUAL

PRODUCE:

Le Monde diplomatique, edición Cono Sur • Fem, femenina y singular
Miré Quién Vino, Vinos y Gastronomía • Pasión Celeste y Blanca • Estación Ciencia
Fundadores de la Izquierda Argentina

A864 Pousadela, Inés M. Que se vayan todos: enigmas de la representación política
CDD la ed., Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006
108 p.; 20x14 cm. (Claves para todos, dirigida por José Nun, N° 53)
ISBN-10: 987-1181-71-X ISBN-13: 978-987-1 181-71-1
1. Ensayo Argentino. I. Título

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
<hr/>	
PRIMERA PARTE • TEORÍAS Y CONCEPTOS	
Capítulo uno	
La representación	15
Capítulo dos	
Democracia representativa y democracia directa	25
Capítulo tres	
La modernidad	35
Capítulo cuatro	
Crisis y metamorfosis	47
<hr/>	
SEGUNDA PARTE • LA REPRESENTACIÓN EN LA ARGENTINA RECIENTE	
Capítulo cinco	
La política argentina desde 1983	65
Capítulo seis	
2001, ¿y después?	79
<hr/>	
CONCLUSIONES	93
<hr/>	
BIBLIOGRAFÍA	97
<hr/>	
LA AUTORA	103

CAPÍTULO CINCO

LA POLÍTICA ARGENTINA DESDE 1983

La dinámica de la democracia de partidos terminó de instalarse en Argentina precisamente en la época en que, como modelo de representación política, ella comenzaba su crisis secular en el mundo occidental. En verdad, nuestro país se había caracterizado durante décadas por la existencia de la forma de sociedad propia de la democracia de partidos: una sociedad de masas en la cual se marcaban nítidos clivajes sociales que se traducían en términos políticos. De eso se trataba, precisamente, el fenómeno peronista. No obstante, aunque Argentina contaba con la sociedad propia de dicho formato de representación, así como con sus vehículos apropiados (dos grandes partidos de masas fuertemente enraizados en bases sociales bien definidas), la dinámica de la competencia política nunca había llegado a ser la de la "democracia de partidos" debido al carácter discontinuo e incompleto de su experiencia democrática.

LA BISAGRA ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO: EL PROCESO ELECTORAL DE 1983

En 1983 se inició el período democrático más prolongado de toda la historia argentina, a lo largo del cual la democracia recientemente recuperada fue sorteando con éxito las sucesivas "pruebas democráticas" que se le fueron presentando. Como resultado, las elecciones quedaron colocadas en el centro del dispositivo institucional y de la dinámica político-partidaria.

El primer hito de este proceso fueron las propias elecciones inaugurales de octubre de 1983 y sus sorprendentes resultados. En esa oportunidad el peronismo fue derrotado en elecciones libres y competitivas por primera vez en su historia de casi cuarenta años. La dilucidación de las razones de ese acontecimiento —se han mencionado, entre otras, el proceso de desindustrialización, la represión y desmovilización del movimiento obrero que había producido la dictadura, y la creciente preocupación de la ciudadanía por los derechos humanos y las libertades públicas— excede los alcances de este trabajo. Lo que aquí nos interesa es señalar lo que esos comicios pusieron en evidencia: la "cuestión peronista" que tantos desvelos había causado en las décadas precedentes había quedado resuelta. El ingrediente básico de incertidumbre que infunde sentido al juego democrático —el hecho de que los resultados electorales no están determinados de antemano y de que los perdedores de hoy pueden ser los ganadores de mañana— había sido recuperado.

La campaña electoral de 1983 fue la última de la vieja época y la primera de la nueva era. Fue, tal como lo afirma Silvio Waisbord, "la última cruzada épica", cuyo objetivo era reinstaurar la fe democrática. Fue, asimismo, la última elección en la cual las pasiones políticas se expresaron bajo la forma de multitudinarias manifestaciones callejeras: de allí en más los partidos políticos no reunirían más que un puñado de decenas de miles de simpatizantes

en un acto partidario o electoral; en lo sucesivo, pasarían a usarse modalidades de campaña más acordes a las nuevas condiciones del ejercicio de la ciudadanía, tales como las caravanas o las caminatas por las localidades, a modo de complemento de las apariciones mediáticas de los candidatos.

Pero la campaña de 1983 fue, sobre todo, la que marcó el inicio de una nueva era en la política argentina. En ella se hizo sentir la presencia novedosa de una "ciudadanía fluctuante" capaz de definirse en función de los acontecimientos políticos de coyuntura y, en particular, frente a los sucesos que puntuaban las campañas electorales. Así, la campaña electoral adquirió una importancia inédita. Ése fue el caso, al menos, de la campaña del radicalismo, ya que la campaña justicialista fue todavía de naturaleza "introspectiva", es decir, dirigida a reafirmar la identidad compartida mediante la puesta en escena de los ritos partidarios más que a captar adhesiones nuevas y condicionales. Mientras que la campaña del PJ estuvo centrada en el partido (cuya invocación parecía suficiente para garantizar el triunfo), la campaña alfonsinista puso todo su énfasis en la presencia del candidato, y se basó —a diferencia de aquélla— en la apelación a la sociedad en su conjunto, en el intento (eventualmente exitoso) de imponer temas novedosos en la agenda político-electoral mediante la activación de un nuevo clivaje que remitía a la puesta en valor de las instituciones y los derechos humanos.

Las elecciones de 1983 fueron, asimismo, las primeras en las cuales se utilizaron —todavía tímidamente— las nuevas tecnologías de comunicación. La campaña alfonsinista estuvo incipientemente profesionalizada. Aunque no todas las tácticas utilizadas fueron realmente novedosas, y en muchos casos se atendió más al "olfato" político del candidato y de sus colaboradores más que a los consejos profesionales, es importante subrayar los rasgos novedosos: la contratación de los servicios de una agencia de

publicidad profesional, la incorporación de un conocido publicista al entorno inmediato del candidato, el uso de encuestas de opinión, el empleo asiduo de la televisión y la colocación de la figura del candidato por sobre la de su partido.

Así, a partir de 1983 el juego político fue completamente trastocado. Los partidos políticos llegaron a ser, por primera vez, actores estelares en la escena política, y manifestaron —también por vez primera— su acuerdo con el mismo conjunto de reglas y su disposición a jugar el mismo juego, en virtud del cual los caminos aceptables para obtener el poder y conservarlo se reducían a uno solo: la vía electoral. Ello ocurría en el preciso momento en que, en el resto del mundo, la creciente influencia de los medios de comunicación —junto con el desdibujamiento de las viejas subculturas políticas, amén de otros cambios de índole sociológica— estaba transformando a las viejas democracias de partidos y constituyendo un nuevo formato representativo, las llamadas "democracias de lo público" o "democracias de audiencia". En Argentina, pues, la democracia a secas se instaló —presumiblemente, bajo el formato de la "democracia de partidos"— en el mismo momento en que en todo el mundo (y, por cierto, también en nuestro país) los partidos comenzaban a dejar de ser lo que habían sido en el pasado: los vehículos casi exclusivos de canalización y agregación de las demandas y de expresión de las identidades políticas. Esto sucedió, asimismo, en el preciso instante en que estas últimas comenzaban a dejar de ser lo que durante tanto tiempo habían sido: identidades compactas, íntegras, sin fisuras.

RUMBO A LAS ELECCIONES DE 1989: CONSOLIDACIÓN Y RUTINIZACIÓN DE LA COMPETENCIA POLÍTICA

Luego de la derrota del peronismo en las elecciones inaugurales de 1983 se desencadenó el proceso de renovación que desembo-

caba en la creciente institucionalización partidaria del peronismo y en el consiguiente abandono de sus más marcadas tendencias movimientistas. El 9 de julio de 1988, el triunfo de Carlos Menem en las internas partidarias exhibió al justicialismo, por primera vez en su historia, como una estructura competitiva.

El traspaso del mando de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, en julio del año siguiente, fue la segunda gran prueba que logró atravesar exitosamente la democracia restaurada. Si bien lo que en su momento se puso de relieve fueron las accidentadas circunstancias en que el presidente radical debió terminar su mandato y que lo obligaron a entregar el mando cinco meses antes de lo previsto, son otras las razones que convierten a ese momento en un hito en el proceso de "normalización" del sistema político. Lo que sucedió en esa oportunidad, en efecto, no ocurría en Argentina desde la década del 20: un presidente constitucional entregó el mando a otro presidente surgido de elecciones abiertas e incuestionablemente limpias. El hecho de que el traspaso se produjera entre partidos rivales, por su parte, era una completa novedad.

También el desarrollo de la campaña electoral de 1989 dio cuenta de la consolidación de los cambios iniciados en 1983, mostrando que la "democracia de audiencia" había llegado para quedarse. Pasada la "primavera democrática", la campaña de 1989 se desarrolló en el marco de una profunda crisis económica y social, y se caracterizó por el descenso de los niveles de participación de la ciudadanía en las actividades proselitistas y por la desconfianza generalizada hacia los políticos y los partidos. Las demandas de trascendencia política dominantes en 1983 habían sido sustituidas por la exigencia de bienes terrenales —ligados, en este caso, a la experiencia traumática de la hiperinflación y la disolución de la autoridad pública—. En contraste con el clima épico de 1983, la demanda abrumadora se vinculaba ahora con el orden público y

la estabilidad de los precios entre una y otra visita al supermercado. En ese contexto, en mayo de 1989 la fórmula Menem-Duhalde triunfó con el 47,3 por ciento de los votos, acelerándose el proceso de transición que culminaría con la renuncia del presidente Alfonsín y el traspaso anticipado del mando.

La contienda electoral de 1989 fue, asimismo, la primera que tuvo lugar con las dos principales fuerzas políticas ya renovadas. Superadas las resistencias y desconfianzas iniciales ante las "técnicas foráneas" movilizadas por consultores y publicistas, todos los partidos importantes recurrieron a los servicios de consultores profesionales e hicieron un uso extensivo de las técnicas de planeamiento estratégico, las encuestas de opinión, los estudios motivacionales, las intervenciones en medios masivos y la publicidad directa e indirecta. Las encuestas de opinión, en particular, tuvieron un rol no sólo cuantitativa sino también cualitativamente más relevante que en el pasado, puesto que sus datos fueron efectivamente utilizados para diseñar la estrategia de campaña. La "opinión pública" ya no era medida por las dimensiones de la asistencia a las manifestaciones; comenzaron a utilizarse en cambio, cada vez más, los *focus groups* y las "encuestas de imagen", que en poco tiempo llegarían a resultar decisivas a la hora de nominar a ciertos candidatos (en particular, figuras extrapolíticas) y desechar a otros en virtud de sus diferenciales de popularidad.

La televisión, por su parte, fue utilizada masivamente y con gran sofisticación, sustituyendo progresivamente al proselitismo callejero. No obstante, ella fue todavía empleada como mecanismo de apoyo de modalidades de campaña más tradicionales: aún no se había desarrollado plenamente como *escena* política y como *medio de producción* de acontecimientos políticos.

Por lo demás, la campaña estuvo marcada por el protagonismo de los dos principales candidatos, necesaria contrapartida de la

atenuación de las identidades partidarias. Ello fue posible gracias al uso de los medios masivos para la construcción y la exhibición de su imagen, así como para el establecimiento de una relación "personal" con el electorado-audiencia. Mucho se habló entonces de la "americanización" de la campaña, especialmente por la enorme carga negativa de la propaganda angelocista, que retrataba a su contrincante como un "payaso" y un "populista advenedizo". La importancia creciente de la imagen de los políticos quedó en evidencia en la figura del entonces candidato a vicepresidente por el radicalismo, el primero en someterse a un tratamiento estético (de ortodoncia) por razones de "videopolítica". En los años siguientes, el presidente Carlos Menem inauguraría de lleno la época de mayor progreso de la política mediática en nuestro país.

LA REELECCIÓN Y DESPUÉS: NUEVOS LIDERAZGOS, NUEVOS PARTIDOS, ¿NUEVA POLÍTICA?

En 1995 una nueva marca fue alcanzada: dos presidentes consecutivos —representantes, por añadidura, de dos partidos diferentes— habían logrado terminar sus mandatos. Ello ocurrió, indudablemente, en un contexto peculiar, luego de la forzada reforma de la Constitución Nacional que había hecho posible la reelección del presidente de turno. Dicha reforma había sido realizada con el asentimiento del principal partido opositor, gracias al controvertido "Pacto de Olivos" firmado entre el presidente Menem y el jefe del radicalismo y ex presidente Raúl Alfonsín. En ese acto —fuertemente rechazado por una opinión pública que lo interpretó como un intento de los dos grandes partidos tradicionales por perpetuar el reparto bipartidista del poder a espaldas de la sociedad— la Unión Cívica Radical había perdido sus credenciales opositoras y buena parte de su ya debilitado apoyo.

Ello se expresó en los resultados de la elección presidencial de mayo de 1995, en las cuales el radicalismo realizó la (para ese entonces) peor elección de su historia, mientras que el Partido Justicialista —abanderado de la estabilidad, pero también responsable de los efectos destructivos de las políticas de ajuste— logró mejorar sus porcentajes de 1989. Con el 17 por ciento de los sufragios, el radicalismo fue desplazado por una "tercera fuerza" de centro-izquierda de aparición reciente que, paradójicamente, ocupaba ahora —con el 30 por ciento de los votos— el segundo lugar detrás del oficialismo.

El Frente Grande —fundado en la ciudad de Buenos Aires en 1993— había irrumpido en escena en ocasión de las elecciones para convencionales constituyentes realizadas en 1994. La nueva fuerza representó entonces el reclamo de institucionalidad republicana y el rechazo hacia la manipulación de las instituciones, el uso abusivo de los fondos públicos y las prácticas clientelares. El Frepaso (Frente País Solidario), formado a fines de ese mismo año por unión del Frente Grande y otros grupos menores, adquirió una dimensión nacional en la competencia por la presidencia en 1995, cuando su fórmula desplazó del segundo lugar al radicalismo para pasar luego a ocupar el lugar vacante de la oposición. Entre 1995 y 1997 el nuevo partido puso en escena una serie de propuestas novedosas —tales como el "apagón" con "cacerolazo" de protesta— al tiempo que hizo gala de una singular aptitud para pelear con éxito la "batalla mediática" en contra de lo que se empezaba a conocer como la "vieja política". Ésta se encarnaba en las dos fuerzas más antiguas, crecientemente identificadas con un sistema de reparto de recursos y de toma de decisiones realizados entre bambalinas y a contrapelo de los intereses del conjunto de la ciudadanía.

El surgimiento y el meteórico crecimiento del Frepaso resultan significativos por varias razones. En primer lugar, porque se

trató de una fuerza de tipo "profesional-electoral", es decir, de la clase de partido "ligero" en términos organizativos que es característica del período de declinación de los partidos de masas. Si esta clase de fuerzas políticas está bien equipada para hacer frente a las nuevas circunstancias de la política es, entre otras cosas, porque sus livianas estructuras organizativas otorgan a sus dirigentes un margen de libertad de acción más amplio que el que les conceden las burocracias establecidas de los partidos de masas. En el caso del Frepaso —un partido fuertemente personalista y verticalista—, su fortaleza radicaba precisamente en la relación de su líder mediático con la ciudadanía a través de los medios de comunicación y sin la mediación de su base militante territorial, ciertamente escasa. El Frente compensaba con creces su carencia de figuras destacadas a nivel territorial con la presencia de un liderazgo nacional cuyos puntos fuertes eran su imagen pública y su capacidad de sintonizar con el ciudadano-televidente, así como su habilidad para utilizar los medios de comunicación como escena para la producción de acontecimientos políticos.

A pesar de (y, también, debido a) su transitoriedad como fenómeno político, la experiencia del Frepaso resulta reveladora de las transformaciones operadas en el formato de representación. Su estrepitosa caída muestra, precisamente, que los nuevos partidos —bien equipados para captar la atención de un electorado selectivo, informado, descomprometido y fluctuante— no están igualmente bien pertrechados para conservar a sus votantes, pues ellos son tan libres de retirar su apoyo como lo eran para brindarlo. Las características que adoptan los nuevos partidos de tipo profesional-electoral —aquellas que les permiten crecer velozmente— expresan con claridad las circunstancias por las que atraviesan *todos* los partidos —también los viejos partidos que nacieron siendo "de masas", y que buscan adaptarse a la nueva situación— en el nuevo contexto. En efecto, incluso los partidos más antiguos tienden al

modelo profesional-electoral para hacer frente a la situación creada por la declinación de la política de masas y el rol ampliado de los medios de comunicación.

Ante la imposibilidad enfrentada por cualquiera de los partidos opositores para vencer al oficialismo por separado, el Frepaso y la UCR formaron, en agosto de 1997, la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación que dos meses más tarde derrotaría al menemismo en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Estos comicios otorgaron a la Alianza un triunfo demoledor no sólo en la Capital Federal sino también en la provincia de Buenos Aires, mostrando que, si las circunstancias eran propicias, la apelación del liderazgo mediático a la ciudadanía independiente podía vencer a las más poderosas y aceitadas maquinarias políticas. En lo sucesivo, esa ciudadanía independiente se revelaría una y otra vez como un invaluable recurso político, tal como sucedió en ocasión de la batalla opositora contra la segunda tentativa de reelección presidencial, puntuada por repetidas amenazas de apelar a consultas populares para dirimir la cuestión.

EL PAROXISMO DE LA IMAGEN: EL PROCESO ELECTORAL DE 1999

Nuestro cuarto hito se registró en 1999, cuando la alternancia se produjo nuevamente pero en un sentido novedoso, ya que por primera vez el justicialismo fue vencido durante su permanencia en el poder y sucedido -pacíficamente- por un presidente de distinto signo político.

Las elecciones de octubre de 1999 acabaron de poner en su sitio todos los elementos que componen el escenario de la democracia de audiencia. Para entonces la televisión era ya el dispositivo central para la puesta en escena del espectáculo político. Se trató, como afirma Alberto Quevedo, de las elecciones más

mediáticas de nuestra historia y, como contrapartida, de las que menor movilización popular suscitaron en todo el período iniciado en 1983 (sin contar, por supuesto, las que vendrían después). La campaña fue la más costosa de la historia: nunca se había invertido tanto en encuestas de opinión y en marketing directo, en la contratación de consultores internacionales y equipos de marketing político y en la elaboración de *spots* televisivos, algunos de los cuales quedarían durante largo tiempo en la memoria colectiva. En ella ocupó un lugar central la construcción de la imagen de los candidatos. El del candidato aliancista fue, en ese sentido, un caso límite de fabricación de imagen por parte de un equipo de expertos publicitarios. Las encuestas, por su parte, se constituyeron en referencia ineludible para todos los políticos, periodistas y encuestadores, sucesivamente empeñados en ratificarlas o en descalificarlas en tanto que representación "correcta" de la escena política.

El proceso electoral de 1999 fue prolongado y complejo: además del presidente de la nación y su vice, fueron elegidos diputados nacionales, gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales, en un período que se extendió desde diciembre de 1998 hasta mayo de 2000. En vez de realizarse una sola elección general para elegir simultáneamente todos los cargos, tuvo lugar una larga serie de actos electorales escalonados en el tiempo según los diversos criterios de conveniencia de los gobiernos provinciales e, incluso, locales. Los "desdoblamientos" de que fueron objeto, en numerosos casos, las elecciones provinciales y locales pusieron en evidencia la variabilidad de las estrategias de los partidos en los distintos niveles de representación, así como el margen de maniobra de que disponían sus líderes en cada uno de ellos y la relevancia que llegó a adquirir la dinámica local como muro de contención de las transformaciones procedentes de la política nacional. En ese sentido,

el proceso electoral constituyó un formidable laboratorio para la observación de los cambios operados en el formato de la representación, que se hicieron visibles en dos clases de fenómenos: por un lado, en la variabilidad y en la composición de la "oferta electoral"; y, por el otro, en las fluctuaciones de las preferencias de la ciudadanía.

Del lado de la oferta sobresalió -junto a la novedosa presencia de la coalición aliancista- una nueva clase de articulación política, que fue precisamente la que permitió al justicialismo defender sus posiciones ante el avance de la Alianza. El caso más notable en ese sentido fue el de la provincia de Buenos Aires, donde Acción por la República -un partido cuyo candidato, Domingo Cavallo, rivalizaba con Eduardo Duhalde en la competencia presidencial- llevó en sus boletas la fórmula del justicialismo para la gobernación. Estas articulaciones mostraban, por un lado, la transformación de los viejos partidos en estructuras más ágiles y pragmáticas, abiertas a nuevos formatos de liderazgos y a nuevas estrategias político-electorales; por el otro, la presencia de partidos de rasgos novedosos, mejor adaptados -pero, también, más vulnerables- a las condiciones de la competencia en la democracia de lo público.

En lo que se refiere al comportamiento electoral de la ciudadanía, el fenómeno más notable fue la fluctuación del voto. Ésta se expresó, por un lado, en la variación de los resultados electorales en comparación con las elecciones precedentes, y entre las diferentes elecciones que tuvieron lugar, en forma escalonada, dentro del propio ciclo electoral de ese año; por el otro, en la variación del voto entre niveles de representación, aun cuando las elecciones para los diversos cargos (nacionales, provinciales y locales) tuvieran lugar en forma simultánea. Este último fenómeno -el llamado "corte de boleta"- reflejaba la autonomía del votante para optar por candidatos de distinta filiación

político-partidaria para cada uno de los cargos o niveles de representación. Ambos fenómenos daban cuenta de la declinación -ciertamente más intensa en ciertas geografías y áreas partidarias que en otras- del "voto cautivo". En términos de los resultados, la intensidad de la fluctuación del voto se reflejó, por ejemplo, en el hecho de que la Alianza impuso su fórmula presidencial en veinte de los veinticuatro distritos en tanto que sólo ganó las gobernaciones en ocho provincias. El Partido Justicialista, por su parte, hizo la peor elección presidencial de su historia, pero quedaron en sus manos catorce gobernaciones provinciales, incluidas las tres más importantes.

CAPÍTULO SEIS 2001, ¿Y DESPUÉS?

Si las elecciones de 1999 pueden ser citadas como una excelente ilustración del proceso "largo" de metamorfosis de la representación, las de 2001 —junto con los eventos que le siguieron— superpusieron, a ese proceso que continuaba su curso, otro fenómeno que con toda justicia puede llevar el nombre de "crisis de representación", en cuyo marco la propia representación política se constituyó en objeto de discurso y pasó a situarse en el centro de las manifestaciones de protesta. Las elecciones legislativas constituyeron tan sólo la primera manifestación de ese proceso, ratificado e intensificado en los episodios subsiguientes: la irrupción de la ciudadanía en el espacio público bajo la forma de los cacerolazos y el movimiento asambleario, su actuación en carácter de "poder destituyente" en el curso de las jornadas del 19 y

20 de diciembre del mismo año electoral, y otros fenómenos circundantes —tales como los llamados "escraches", o las más ampliamente difundidas manifestaciones de desconfianza hacia las instancias representativas y la clase política, visibles en los sondeos de opinión pública—. Todos ellos acabaron por poner en evidencia la existencia de una honda brecha entre representantes y representados.

LA CATÁSTROFE ELECTORAL: OCTUBRE DE 2001

Las elecciones de renovación legislativa de octubre de 2001 tuvieron lugar en un contexto de profundo desencanto con la experiencia iniciada dos años atrás, con el triunfo de la Alianza UCR-Frepaso en las elecciones presidenciales. Sólo veinticuatro meses después de aquella elección signada por la esperanza moderada en los cambios que supondría el desplazamiento del menemismo del poder, la profundización de una recesión económica que ya iba por su cuarto año, la evidente falta de rumbo del nuevo gobierno, su inhabilidad para resolver los problemas más urgentes, la descomposición de la coalición gobernante y su incapacidad o ausencia de voluntad para cumplir sus escasas promesas electorales —centradas sobre todo en la rehabilitación de las instituciones, el ataque a la corrupción y la renovación de las prácticas políticas tradicionales— habían desembocado en un ácido desencanto con los partidos tradicionales, la "clase política" y las prácticas políticas habituales. No sólo la alianza gobernante caía dentro de ese grupo, pero ella sería la más castigada por los votantes ese domingo 14 de octubre.

Desde varios meses antes de las elecciones, el rechazo que habría de expresarse electoralmente —y luego en forma extraelectoral e incluso extrainstitucional— se respiraba en las calles, así como en el espacio virtual de la *web* devenido foro de expre-

sión de protestas y de comunicación entre ciudadanos. Ya desde cierto tiempo atrás, y en una exhibición de abierto descontento con la oferta política disponible para esas elecciones —las mismas viejas caras de siempre, los mismos senadores sospechados de haber cobrado sobornos a cambio de la aprobación de la ley de flexibilización laboral, los desconocidos de siempre que ocupaban bancas en el Congreso Nacional gracias a las ventajas de las "listas sábana" que nadie parecía verdaderamente dispuesto a suprimir; en fin, los mismos políticos que desde hacía años participaban, sin distinción de colores partidarios, en un toma y daca que implicaba tanto el desvío hacia manos privadas de cuantiosos fondos públicos como el desvirtuamiento de su misión como representantes del pueblo— abundaban las apelaciones —provenientes, en su mayoría, de "ciudadanos comunes" en forma individual o en asociaciones *ad hoc*— a no concurrir a votar, a votar en blanco o, sobre todo, a ejercer una protesta más innovadora y más activa consistente en anular el voto reemplazando dentro del sobre de votación la boleta partidaria oficializada por otras boletas fabricadas para la ocasión, por mensajes críticos o insultantes hacia los políticos, o incluso por objetos extraños como los que eventualmente terminaron sorprendiendo a las autoridades de mesa a la hora del recuento de los votos. Así, tiempo antes de la elección circulaban por calles, plazas y esquinas, así como por la geografía del ciberespacio, boletas caseras que instaban a votar por próceres como San Martín o Belgrano, por personajes de historieta tales como Clemente —cuyo principal mérito era, según los impulsores de su candidatura, el carecer de manos que le permitieran robarles a los contribuyentes—, por Jesucristo o por Osama Bin Laden, entre muchos otros. Estaban también quienes, negándose a convalidar la falta de opciones a que eran sometidos en esa elección, abogaban lisa y llanamente por la abstención, y proponían burlar a las autoridades realizando

excursiones colectivas que, en el domingo electoral, los condujeron a más de quinientos kilómetros del lugar donde les correspondía votar -lo cual, legalmente, los eximiría del deber de concurrir a las urnas-.

Los resultados de la elección se colocaron en línea con ese enrarecido clima de opinión. El conjunto de quienes no concurren a votar y de quienes emitieron alguna forma de voto "negativo" (ya fuera nulo o en blanco) alcanzó cifras superiores al 40 por ciento de los votantes habilitados, un porcentaje que superó ampliamente a la suma de los votos recibidos por los dos partidos políticos "mayoritarios" y con raíces más profundas en la política nacional, cuya magra cosecha no llegaba, conjuntamente, al 35 por ciento de los votos calculados sobre el total de votantes habilitados. La abstención alcanzó la cifra inédita del 24,58 por ciento del padrón; en términos cualitativos, las encuestas registraron modificaciones relevantes en las motivaciones de los abstencionistas, que ya no lo eran por falta de interés o de tiempo para informarse, sino por la ausencia de opciones significativas y por voluntad de expresar su rechazo a los partidos, sus dirigentes, y sus sucesivas y fracasadas gestiones de gobierno. Los votos nulos y en blanco, por su parte, constituyeron el 23,99 por ciento de los sufragios emitidos para la categoría diputados nacionales (13,23 por ciento y 10,76 por ciento, respectivamente), y cifras casi idénticas en el rubro senadores nacionales. Esta modalidad de comportamiento electoral tendió a ser más acentuada en los sectores urbanos y de mayor nivel socioeconómico o educativo, y se registraron amplísimas variaciones entre distritos. El "voto negativo", lejos de ser la expresión de la apatía o la indiferencia de la ciudadanía, adquirió -con particular intensidad en el caso del voto anulado- un carácter activo e incluso militante. De hecho, en contraste con la larga lista del voto en blanco -forma privilegiada de expresión

electoral del peronismo proscripto en los años que siguieron al derrocamiento de Perón en septiembre de 1955-, el voto anulado constituyó una auténtica novedad.

La caída electoral de la Alianza fue estrepitosa (23,03 por ciento de los votos positivos -17,50 por ciento de los votos emitidos- para diputados nacionales en todo el país), sobre todo en comparación con las cifras que había obtenido en la excelente elección anterior. El Partido Justicialista, en una situación simétricamente opuesta, apareció como el gran triunfador (36,26 por ciento de los votos positivos; 27,56 por ciento de los votos emitidos para la misma categoría a nivel nacional), pese a haber reunido casi un millón de sufragios menos que los que dos años atrás le habían significado la peor elección de su historia.

EL ESTALLIDO EXTRAELECTORAL: LAS JORNADAS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE

Dos meses después de los comicios legislativos (cuyos resultados no fueron interpretados por la dirigencia como la señal de alarma que verdaderamente eran) se produjo el estallido. En los últimos días de diciembre de 2001 el país ardía. El proceso se había precipitado desde comienzos de diciembre, cuando se hizo evidente la incapacidad del gobierno nacional para hacer frente a los vencimientos de fin de año de los servicios de la deuda pública. La negativa del FMI a desbloquear un nuevo préstamo para asegurar los gastos mínimos del Estado y el pago de los vencimientos de fin de año provocó entonces una fuerte fuga de capitales por parte de grupos financieros tanto argentinos como extranjeros. El 3 de diciembre, entonces, el gobierno promulgó un decreto que limitaba drásticamente las posibilidades de retiro de fondos en efectivo de los bancos. Un mes más tarde la paridad entre el peso y el dólar habría pasado a la historia, y

los fondos atrapados en los bancos sufrirían una brutal devaluación. Continuaba, entretanto, la fuga de miles de millones de dólares hacia el exterior. Al mismo tiempo, a comienzos de diciembre se extendían las huelgas de empleados públicos en varias provincias, en reclamo del pago de varios meses de salarios atrasados. Sus manifestaciones se sumaban, así, a las de los piqueteros, que llevaban ya largo tiempo haciéndose ver mediante cortes de rutas. El 12 de diciembre se producía en la Capital Federal el primer "cacerolazo" protagonizado por la clase media en protesta por el congelamiento de las cuentas bancarias. El día siguiente era el turno de la huelga general convocada por las tres confederaciones sindicales (las dos CGT -oficial y disidente- y la CTA). En la misma semana se llevó a cabo la consulta nacional organizada por el Frente Nacional contra la Pobreza (alianza de la CTA, el ARI, el Polo Social y una parte del PC), en la cual tres millones de personas tomaron posición a favor de la propuesta de un seguro de desempleo. El día 14 se produjeron en Rosario y Mendoza los primeros saqueos, que gradualmente se extendieron a otros distritos para llegar al Gran Buenos Aires tres días más tarde. En este último caso un ingrediente adicional contribuyó al clima de confusión y desconcierto: el rol ambiguo del aparato justicialista, que alimentó las provocaciones al tiempo que las autoridades locales de filiación peronista se alineaban con el gobierno nacional para organizar la represión. Dos días después, el 19 de diciembre, los saqueos y enfrentamientos con la policía en el Gran Buenos Aires provocaron numerosos heridos y los primeros muertos. Se produjeron numerosas huelgas y manifestaciones de asalariados del sector público en diversos puntos del país. Éstas no apuntaban solamente contra el gobierno nacional sino también contra los gobiernos provinciales y municipales, en su mayor parte de signo justicialista. En varios distritos -especialmente en Córdoba- se produ-

jeron combates callejeros particularmente violentos. Esa noche, finalmente, el presidente De la Rúa pronunció un discurso por cadena nacional denunciando a los "enemigos del orden y de la República", amenazando con reprimir, declarando el estado de sitio y llamando a la unión nacional con el justicialismo. Pero ya era demasiado tarde: el gobierno no tenía nada que ofrecer a aquellos cuya colaboración solicitaba.

En el preciso instante en que el presidente pronunciaba su discurso comenzaron los cacerolazos de protesta. Una vez terminada su alocución -"autista", la calificaron algunos-, los manifestantes comenzaron a converger espontáneamente, cacerola en mano, hacia la Plaza de Mayo, en abierto y explícito desafío al recién declarado estado de sitio. En ese momento comenzó a sonar el reclamo, aún incompleto, que daría su especificidad a esta ola de protesta: "que se vayan". A la una de la mañana del 20 de diciembre, y ante la insistencia de los manifestantes, se anunció la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo. Seis horas después el Presidente de la Nación se retiraba en helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada luego de haber firmado su propia renuncia. Por primera vez en la historia, un gobierno surgido de elecciones libres era derribado no por un golpe militar sino por el rechazo popular manifestado en las calles.

En contraste con la "fiesta" del 19 de diciembre -verdadero carnaval en el que se suspendieron y reformularon las identidades previas-, el día 20 estuvo marcado por la tragedia. Ese día la Plaza de Mayo se convirtió en un campo de batalla y en una fortaleza que unos pretendían ocupar y otros desalojar. Fue, sin embargo, bien diferente del escenario de lucha típico de las décadas anteriores: fueron otros los actores y otras las reglas del juego. Los antecedentes de los enfrentamientos de los manifestantes con la policía el día 20 de diciembre no se hallaban en las acciones

organizadas de las vanguardias políticas de los 70 sino, en cambio, en las formas de lucha de los piqueteros y en las "puebladas" de los 90, así como en los repertorios de acción aprendidos y perfeccionados por los jóvenes en las canchas de fútbol y en los recitales de rock. El saldo de la experiencia fue de por lo menos 35 muertos, 439 heridos y 3.273 detenidos en todo el país, la mayor parte de ellos en el centro político de la ciudad de Buenos Aires.

En el curso de esas jornadas (descriptas por buena parte de la literatura como "gesta popular", "epopeya", "pueblada", "insurrección", "situación revolucionaria" o "gestación de un nuevo contrapoder") la lógica de la representación -abiertoamente cuestionada- fue temporariamente suplantada por la "lógica de la expresión". Es de señalar, en particular, el hecho de que lo que tuvo lugar fue una "revocación sin revocabilidad". Como hemos visto, en el marco de nuestro sistema político -de carácter representativo- los gobernantes no están sujetos a mandato y no pueden, por consiguiente, ser revocados por el mero hecho de no cumplir sus promesas o de no estar a la altura de las expectativas depositadas en ellos. La movilización popular, actuando por fuera de los canales institucionales previstos para el caso, produjo entonces una revocación de hecho del gobierno en funciones, obligándolo a renunciar.

Un rasgo una y otra vez resaltado por los observadores fue el comienzo espontáneo, autoconvocado e inesperado de todo el proceso. El festivo acto de desafío que fue la salida nocturna del 19 de diciembre fue también la celebración de una sorpresa, pues sus propios actores tenían la sensación de protagonizar un hecho histórico, la sensación de ser arrastrados por un inesperado proceso colectivo que, al tiempo que los guiaba, los convertía en actores. Los mismos individuos que, en su rol de audiencia, habían pasado largas horas siguiendo la evolución de los acontecimientos por televisión, los mismos que se habían agolpado frente a sus

pantallas para mirar la última aparición pública del presidente declarando el estado de sitio, y que luego -todavía en carácter de espectadores- se habían asomado a sus ventanas y balcones a escuchar y a mirar lo que pasaba afuera, se habían convertido en actores en el momento en que, sin saber muy bien por qué -o tal vez sabiéndolo bien pero desconociendo si sus motivaciones se compadecían con las de cada uno de los demás- habían corrido a sus cocinas a buscar ollas, sartenes y cucharones para golpear desde sus ventanas. Esos individuos se incorporaron a la multitud en el momento en que, al ver que sus vecinos-gentes a las que tal vez nunca antes habían dirigido la palabra-comenzaban a agolparse con sus cacerolas en sus respectivas puertas, bajaron también a hacer ruido primero desde los umbrales, luego ya en las esquinas, más tarde -en un movimiento casi imperceptible- en alguna intersección emblemática o en la plaza más importante del barrio, y un poco más tarde, finalmente, en el trayecto hacia la Plaza de Mayo. Atrás habían quedado los inútiles televisores encendidos.

El proceso, en suma, no tuvo un autor, es decir, alguien que lo convocara, lo dirigiera y controlara su curso. No tuvo, en consecuencia, un significado unívoco. De hecho, las motivaciones de los manifestantes (algunos de los cuales eran habitués de diversas manifestaciones de protesta, en particular relacionadas con los derechos humanos, mientras que otros nunca habían estado en una movilización política) fueron extremadamente diversas: desde la indignación por la declaración del estado de sitio hasta el repudio del "corralito" bancario, pasando por el rechazo hacia un modelo excluyente e injusto de crecimiento económico y la crítica a un sistema político ineficiente, ineficaz y, sobre todo, corrupto. El lema acuñado en esas jornadas -"que se vayan todos"- logró precisamente, en virtud de su vaguedad y su amplitud, establecer una cadena de equivalencia entre todas

las demandas y reclamos insatisfechos mediante el señalamiento de los responsables (los mismos en todos los casos) de esa insatisfacción. Mediante la activación del clivaje "gente común vs. *clase* política", el espacio social quedaba dividido en dos campos antagónicos. En torno del grito de batalla se congregaban consignas, quejas y propuestas tan variadas como pudiera imaginarse, portadas por gentes diversas en términos sociales, económicos, políticos y etarios.

Cada una de las interpretaciones que circularon entonces para dar cuenta del "que se vayan todos" remitía a una toma de posición ante el sistema de representación. El slogan significaba, para algunos, el reclamo del fin de toda representación y de la institución de un sistema de democracia "directa", "participativa" o carente de mediaciones. Para otros, en cambio, el slogan remitía a la demanda de revocatoria de todos los mandatos y de llamado a nuevas elecciones generales que produjeran una renovación total de la "clase política". Para otros tantos, la frase no debía ser tomada en forma literal, sino como forma de englobar reclamos diversos bajo un paraguas de provocación creadora, al modo del paradójico "Prohibido Prohibir" que pasó a la historia como símbolo del Mayo Francés. Otros, finalmente, aceptaban la literalidad del reclamo en ciertos contextos —tales como su pronunciación ante la sede de la Corte Suprema, en reclamo del apartamiento de todos sus miembros— pero rescataban la potencia creadora de su carácter alegórico, al tiempo que denunciaban los intentos de llevarla a la práctica en el terreno global. Si el "que se vayan" era extremadamente polisémico, lo mismo cabe decir acerca del "todos". Junto con los políticos —unánimemente considerados los responsables más prominentes de la situación que vivía el país— eran difusamente señalados aquí y allá los dirigentes sindicales, los empresarios, los jueces y los diversos componentes de la "clase dirigente" en sentido amplio.

Luego de la renuncia de De la Rúa, la movilización popular se llevó consigo a otro presidente —Adolfo Rodríguez Saá, quien debió renunciar ante un nuevo cacerolazo a sólo una semana de haber sido designado por la Asamblea Legislativa—, no sin antes forzar la renuncia de algunos de sus funcionarios. Fue particularmente notable el caso de Carlos Grosso—uno de los primeros políticos menemistas juzgados por hechos de corrupción—, que en su propia defensa declaró, antes de asumir como jefe de Gabinete de Rodríguez Saá, que había sido designado por su inteligencia y no por su prontuario. La reacción de la ciudadanía forzó entonces su inmediata remoción.

En el período de algo más de cuatro meses que se extendió desde la renuncia de De la Rúa hasta la relativa estabilización del gobierno de Eduardo Duhalde, designado en reemplazo de Rodríguez Saá el 2 de enero de 2002, se sucedieron —bajo la mirada escrutadora de una ciudadanía armada de cacerolas— cinco presidentes y seis ministros de Economía. Durante ese tiempo se produjeron conflictos de toda clase: a los conflictos derivados de la pobreza, el desempleo y el hambre —piquetes, cortes de ruta, saqueos, pedidos de alimentos, huelgas a la vieja usanza— se sumaban las protestas de la clase media atacada y empobrecida, así como las ruidosas quejas de una clase media no tan empobrecida pero imposibilitada de utilizar sus ahorros, atrapados en los bancos.

El producto organizativo más duradero de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron las asambleas barriales o populares que rápidamente proliferaron en los principales centros urbanos del país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Ensalzadas por quienes las veían como una instancia evolutiva superior luego de los cacerolazos espontáneos, a la vez que criticadas por quienes las consideraban la causa de la pérdida del vigor y la inocencia de lo espontáneo, las asambleas constitu-

yeron una de las prácticas más novedosas crecidas al calor de la crisis de representación. Ellas no fueron ni por asomo lo masivas que habían sido los cacerolazos, que no exigían de sus participantes el tiempo, la paciencia, las habilidades retóricas o el interés por el debate político que requería la militancia asamblearia. Con todo, a sólo tres meses de las jornadas de diciembre de 2001 había más de cien asambleas en la Capital Federal y otras tantas en el Gran Buenos Aires.

El fenómeno se caracterizó por su poder revelador de la naturaleza de la crisis de la que había emergido. Las asambleas constituyeron una instancia productora de discursos en torno de la representación devenida problemática, así como de prácticas políticas novedosas encaminadas a la búsqueda ya fuera de complementos, ya de alternativas, a las prácticas habituales de la representación política. El discurso de las asambleas sobre la representación abarcó desde posturas "reformistas" que contemplaban una posibilidad de recambio capaz de "limpiar" el sistema representativo de sus lacras y restituirlo a su buen funcionamiento -actitud que se reflejaba en la impugnación moral de los integrantes de la "clase política" y en la exigencia de "purificación" de la política mediante la reforma y el mejoramiento de sus reglas, mecanismos, incentivos y controles- hasta posiciones "revolucionarias" e impugnadoras de toda representación, a la que consideraban sinónimo de traición dado que había sido instituida precisamente con la intención de apartar al pueblo del poder que le correspondía por derecho propio. En uno y otro caso, el discurso dominante acerca de la representación tanto entre los asambleístas como entre buena parte de sus "intérpretes autorizados" se centraba en la impugnación de la distancia entre representantes y representados. Algunos, los más radicales, rechazaban la institución de esa separación mediante un discurso rehabilitador del mandato, de la demo-

cracia directa y de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Otros rechazaban solamente la brecha "excesiva" que, en ausencia de todo control, se había abierto entre gobernantes y gobernados en el curso de los años precedentes, pero no fa distinción entre representantes y representados en sí misma. Aceptaban, pues, la idea de la representación como sustituto funcional de la democracia directa y reclamaban, entonces, una "mejor" representación, que permitiera que los intereses y las opiniones de los gobernados encontraran un "reflejo fiel" en sus gobernantes. Mientras que éstos buscaban la salida de la crisis en una democracia más "representativa"; aquéllos, en cambio, sólo lograban vislumbrarla en una democracia más "directa".